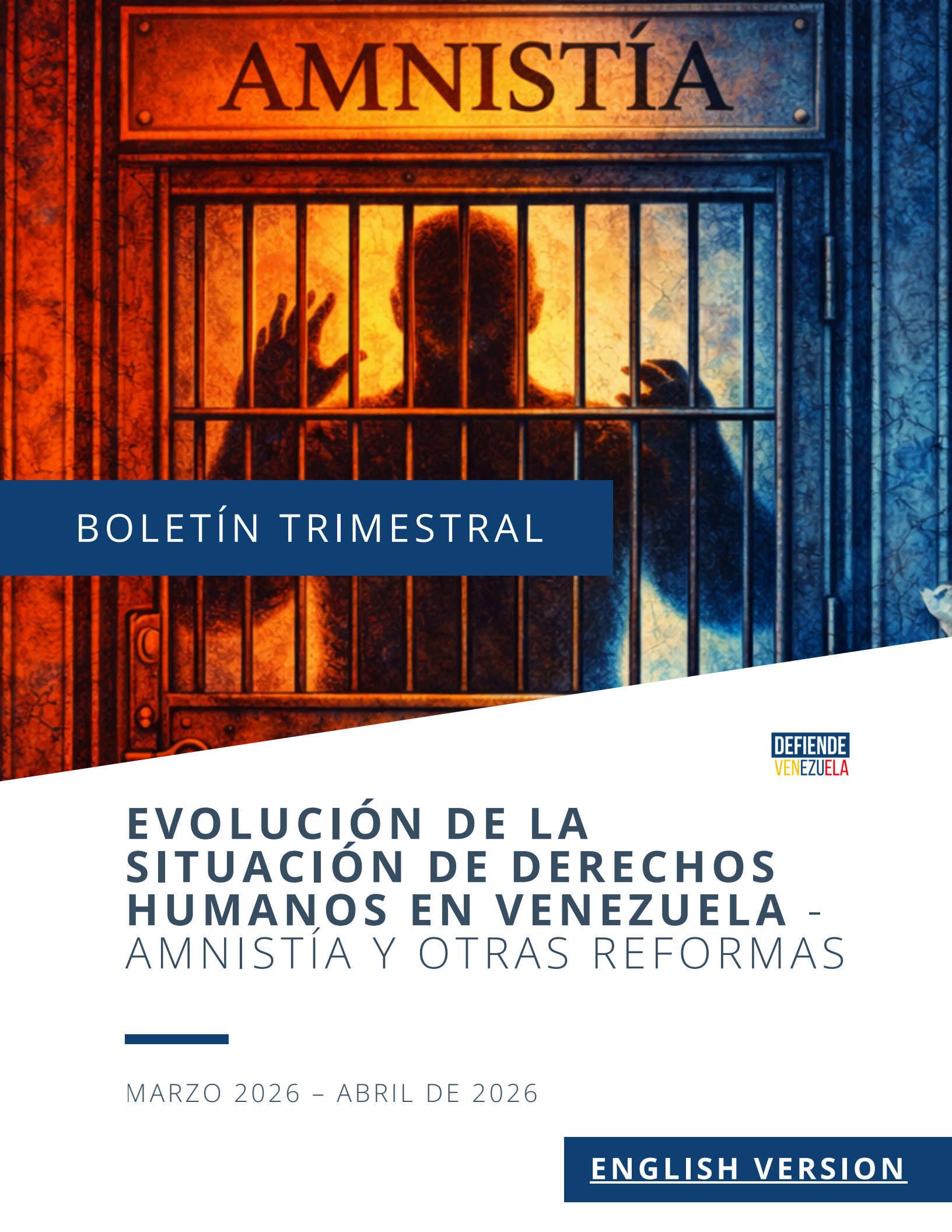




AMNISTÍA

BOLETÍN TRIMESTRAL

DEFIENDE
VENEZUELA

EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA - AMNISTÍA Y OTRAS REFORMAS

MARZO 2026 – ABRIL DE 2026

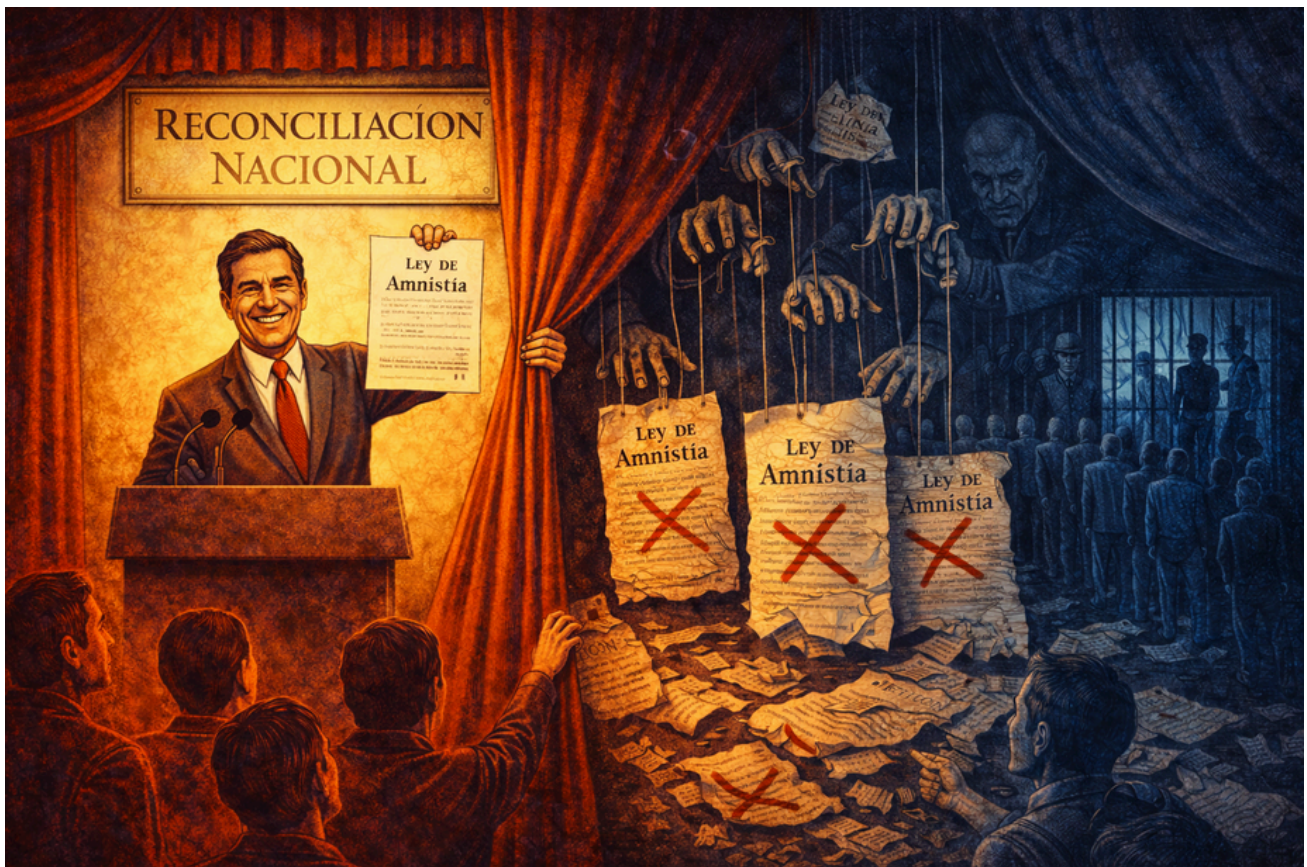
ENGLISH VERSION

EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA - AMNISTÍA Y OTRAS REFORMAS

En este nuevo boletín de DV damos seguimiento a la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, a la designación de cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo y a los anuncios recientes de reformas políticas en Venezuela.

SUMARIO

- Venezuela: Denegación de amnistías evidencia patrón de exclusión y discrecionalidad estatal.
- Proceso de Selección para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo.
- Nuevos anuncios de reformas económicas en Venezuela.



I. VENEZUELA: DENEGACIÓN DE AMNISTÍAS EVIDENCIA PATRÓN DE EXCLUSIÓN Y DISCRECIONALIDAD ESTATAL

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, publicada en Gaceta Oficial y entrada en vigor en febrero de 2026, fue presentada por las autoridades venezolanas como un instrumento para promover la reconciliación nacional y cerrar ciclos de persecución política. No obstante, a pocas semanas de su vigencia, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre un patrón de negativa sistemática en su aplicación, que desnaturaliza el propósito del instrumento.

Diversas decisiones judiciales han rechazado solicitudes de amnistía sin motivaciones suficientes o mediante interpretaciones restrictivas. Esta práctica ha sido documentada en casos de distintos años, contextos y perfiles, lo que evidencia que no se trata de situaciones aisladas, sino de un criterio reiterado.

Entre los casos recientes, destaca la negativa de amnistía a los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo. Ellos fueron detenidos entre el 4 y 7 de julio de 2022, y los procesos en su contra han sido señalados como de carácter político por la sociedad civil. Asimismo, se ha documentado la exclusión de los denominados “policías metropolitanos” detenidos por los hechos de abril de 2002 en Puente Llaguno, uno de los casos más emblemáticos de justicia politizada en el país.

En Guayana, también se reportó la negativa del beneficio a la exdiputada Ligia Delfín y sus compañeros de causa, quien había sido detenida en 2014. Esta causa que ha estado paralizada por 12 años, el tribunal fundamentó su decisión en que el delito imputado (homicidio intencional en grado de tentativa) estaría excluido de la amnistía.

Sin embargo, Ezequiel Monsalve, su abogado defensor privado, ha señalado que la ley no establece exclusiones respecto de tipos penales en grado de tentativa, lo que plantea dudas sobre la legalidad y coherencia de dicha interpretación judicial, en especial el principio de interpretación favorable, regulado en el artículo 5 de la propia ley.

A estos casos se suma la situación de personas privadas de libertad en condiciones de especial vulnerabilidad. Recientemente, se reportó la negativa de amnistía a un preso político con cáncer, lo que agrava el riesgo a su vida e integridad personal bajo custodia del Estado.

Diversos análisis coinciden en que la aplicación de la amnistía ha sido selectiva, limitada y discrecional, dejando por fuera a numerosas personas que podrían beneficiarse de la norma conforme a su objeto y finalidad. Esta situación no solo compromete el derecho a la libertad personal, sino que también afecta los principios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica.

En este contexto, la reiterada negativa del Estado venezolano a aplicar la ley de amnistía pone en entredicho su efectividad real como mecanismo de reconciliación. Más allá del texto legal, los hechos evidencian una implementación condicionada por criterios políticos, lo que limita su alcance y profundiza la desconfianza en las instituciones de justicia.

II. LA ASAMBLEA NACIONAL DESIGNA TITULARES PARA LOS CARGOS DE FISCAL GENERAL Y DEFENSOR DEL PUEBLO

El pasado 25 de febrero, tras la renuncia de los titulares del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, Tarek Saab y Alfredo Ruíz, fue abierto el proceso para la selección de los funcionarios que ocuparán los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo.

Junto con el Contralor General, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo integran el máximo órgano del Poder Ciudadano, el Consejo Moral Republicano.

Según la Constitución de Venezuela, para la selección de los cargos que integran el Consejo Moral Republicano, éste convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones constituido por amplios sectores de la sociedad, que elaborará las ternas de candidatos para cada cargo. De estas ternas se escogen los titulares de cada órgano por voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el presidente del Comité de Evaluación de Postulaciones, diputado Giuseppe Alessandrello, al 17 de marzo ya se abrían presentado más de 130 candidatos, que estarían siendo evaluados por el comité.

Entretanto, Larry Davoe, que se venía desempeñando como secretario ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos, asumió la encargaduría de la posición de Fiscal General. Davoe, cercano al ejecutivo, fue uno de los candidatos a la titularidad del cargo.

Por su parte, el cargo de Defensor del Pueblo fue temporalmente asumido por Tarek Saab, anterior Fiscal General, quien no figuraba entre los candidatos a la titularidad del cargo.

A pesar de la falta de equilibrio institucional e independencia de poderes imperante en Venezuela, la sociedad civil y la academia presentaron candidaturas notables para las vacancias; como, por ejemplo, la de la doctora en derecho Magaly Vásquez, secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

El 09 de abril, la Asamblea Nacional designó al señor Larry Davoe y a la Sra. Eglée Gonzáles como nuevos titulares de los cargos de Fiscal General y Defensora del Pueblo, respectivamente.

Davoe ha sido cuestionado por sus lazos con el gobierno, habiendo servido como abogado del Estado en causas internacionales por violaciones de derechos humanos y como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, Eglée González ha sido asociada con sectores moderados de oposición y ha fungido como asesora en materia electoral para el Consejo Nacional Electoral.

Sectores políticos y de la sociedad civil han calificado las designaciones de opacas, inapropiadas y políticamente motivadas, estimando que no garantizan la independencia de poderes públicos y una transición a la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

III. NUEVOS ANUNCIOS DE REFORMAS ECONÓMICAS EN VENEZUELA

El pasado 9 de abril, la Sra. Delcy Rodríguez, que ejerce funciones de presidenta encargada de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, anunció una serie de reformas económicas y fiscales.

Entre tales medidas, Rodríguez anunció un “aumento responsable” del salario mínimo en Venezuela, hoy equivalente a 27 centavos de dólar de acuerdo con la tasa de cambio oficial.

La jefa chavista del ejecutivo también anunció reformas tributarias y del mercado inmobiliario, con la finalidad de “dinamizar” la economía.

Las medidas anunciadas no fueron concretadas con cifras o indicadores específicos, haciendo difícil para los expertos determinar su idoneidad.

Por otro lado, la renovación del Consejo Nacional Electoral y la convocatoria a elecciones presidenciales, tan esperadas por la sociedad venezolana, no formaron parte del anuncio.

SOBRE DEFIENDE VENEZUELA:

Defiende Venezuela es una organización de litigio internacional en derechos humanos fundada en el año 2017 y representante de más de 200 personas en procedimientos internacionales de justicia y reparación.

Si desea comunicarse con nosotros, no dude en contactarnos a través de nuestras redes sociales: @defiendeve o del correo electrónico: gdavila@defiendevenezuela.org.



AMNISTÍA

QUARTERLY BULLETIN

EVOLUTION OF THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN VENEZUELA: AMNESTY AND OTHER REFORMS

MARCH-APRIL 2026

DEFIENDE
VENEZUELA

EVOLUTION OF THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN VENEZUELA: AMNESTY AND OTHER REFORMS

In this latest DV newsletter, we provide an update on the implementation of the Amnesty Law for Democratic Coexistence, the appointments of the Attorney General and the Ombudsman, and recent announcements regarding political reforms in Venezuela.



SUMMARY:

- Venezuela: Denial of amnesties highlights a pattern of exclusion and state discretion.
- Selection process for the positions of Attorney General and Ombudsman.
- New announcements regarding economic reforms in Venezuela

I.VENEZUELA: DENIAL OF AMNESTIES REVEALS A PATTERN OF EXCLUSION AND STATE DISCRETION

The Amnesty Law for Democratic Coexistence, published in the Official Gazette and set to take effect in February 2026, was presented by Venezuelan authorities as a tool to promote national reconciliation and put an end to cycles of political persecution. However, just a few weeks after it took effect, human rights organizations have warned of a pattern of systematic denial in its application, which undermines the purpose of the law.

Various judicial decisions have rejected amnesty requests without sufficient justification or through restrictive interpretations. This practice has been documented in cases spanning different years, contexts, and profiles, demonstrating that these are not isolated incidents but rather a recurring pattern.

Among recent cases, the denial of amnesty to trade unionists Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez, and Néstor Astudillo stands out. They were arrested between July 4 and 7, 2022, and the proceedings against them have been identified by civil society as politically motivated. Likewise, the exclusion of the so-called “metropolitan police officers” arrested for the events of April 2002 in Puente Llaguno—one of the most emblematic cases of politicized justice in the country—has been documented.

In Guayana, it was also reported that former congresswoman Ligia Delfín and her co-defendants—who had been arrested in 2014—were denied the benefit.

In this case, which has been stalled for 12 years, the court based its decision on the grounds that the alleged crime (attempted murder) was excluded from the amnesty. However, Ezequiel Monsalve, her private defense attorney, has pointed out that the law does not establish exclusions regarding criminal offenses in the attempt stage, which raises doubts about the legality and consistency of this judicial interpretation, particularly the principle of favorable interpretation, as regulated in Article 5 of the law itself.

Added to these cases is the situation of persons deprived of liberty who are in particularly vulnerable conditions. Recently, it was reported that amnesty was denied to a political prisoner with cancer, which exacerbates the risk to his life and personal integrity while in state custody.

Various analyses agree that the application of the amnesty has been selective, limited, and discretionary, leaving out numerous individuals who could benefit from the law in accordance with its purpose and intent. This situation not only compromises the right to personal liberty but also undermines the principles of equality before the law and legal certainty.

In this context, the Venezuelan government's repeated refusal to implement the amnesty law calls into question its actual effectiveness as a mechanism for reconciliation. Beyond the legal text, the facts show that its implementation is driven by political considerations, which limits its scope and deepens mistrust in the justice system.

Davoe has been criticized for his ties to the government, having served as a state attorney in international cases involving human rights violations and as Executive Secretary of the National Human Rights Council. For her part, Eglée González has been associated with moderate sectors of the opposition and has served as an electoral advisor to the National Electoral Council.

Political and civil society sectors have described the appointments as opaque, inappropriate, and politically motivated, arguing that they do not guarantee the independence of public authorities or a transition to democracy and the rule of law in Venezuela.

II. THE NATIONAL ASSEMBLY APPOINTS NOMINEES TO THE POSITIONS OF ATTORNEY GENERAL AND OMBUDSMAN

On February 25, following the resignation of the heads of the Public Prosecutor's Office and the Office of the Ombudsman, Tarek Saab and Alfredo Ruíz, the selection process began to fill the positions of Attorney General of the Republic and Ombudsman.

Together with the Comptroller General, the Attorney General and the Ombudsman form the highest body of the Citizen Power, the Republican Moral Council.

According to the Venezuelan Constitution, for the selection of the positions that make up the Republican Moral Council, the Council shall convene an Nomination Review Committee composed of broad sectors of society, which will draw up shortlists of candidates for each position. From these shortlists, the heads of each body are chosen by a two-thirds majority vote of the National Assembly.

According to the chair of the Nomination Review Committee, Representative Giuseppe Alessandrello, as of March 17, more than 130 candidates had already submitted their applications, which were being reviewed by the committee.

Meanwhile, Larry Davoe, who had been serving as executive secretary of the Human Rights Council, assumed the acting role of Attorney General. Davoe, who is close to the executive branch, was one of the candidates for the position.

Meanwhile, the position of Ombudsman was temporarily filled by Tarek Saab, the former Attorney General, who was not among the candidates for the permanent position.

Despite the lack of institutional balance and separation of powers prevailing in Venezuela, civil society and academia put forward notable candidates for the vacancies; for example, Magaly Vásquez, Ph.D. in Law, secretary of the Andrés Bello Catholic University and a full member of the Academy of Political and Social Sciences.

On April 9, the National Assembly appointed Mr. Larry Davoe and Ms. Eglée Gonzáles as the new holders of the positions of Attorney General and Ombudsman, respectively.

Davoe has been criticized for his ties to the government, having served as a state attorney in international cases involving human rights violations. Eglée González has been associated with moderate sectors of the opposition and has served as an electoral advisor to the National Electoral Council.

Political and civil society sectors have described the appointments as opaque, inappropriate, and politically motivated, arguing that they do not guarantee the independence of public authorities or a transition to democracy and the rule of law in Venezuela.

III. NEW ANNOUNCEMENTS REGARDING ECONOMIC REFORMS IN VENEZUELA

On April 9, Delcy Rodríguez, who is serving as Venezuela's acting president following Nicolás Maduro's arrest, announced a series of economic and fiscal reforms.

Among these measures, Rodríguez announced a "responsible increase" in Venezuela's minimum wage, which currently stands at 27 cents according to the official exchange rate.

The Chavista head of the executive branch also announced tax and real estate market reforms, with the aim of “boosting” the economy.

The announced measures were not backed by specific figures or indicators, making it difficult for experts to assess their suitability.

On the other hand, the renewal of the National Electoral Council and the call for presidential elections—so eagerly awaited by Venezuelan society—were not part of the announcement.

ABOUT DEFIENDE VENEZUELA:

Defiende Venezuela is an international human rights litigation organization founded in 2017.

If you would like to get in touch with us, please feel free to contact us through our social media accounts: @defiendeve or by email: gdavila@defiendevenezuela.org.